

Queja sobre la discriminación de las personas adoptadas y los «bebés robados» respecto de su filiación e identidad de origen

Artículos 178 y 180 del Código Civil, igualdad filiativa y autonomía filiativa del adoptado adulto

La presente queja se formula en adhesión a la n.º 26097224, presentada por Olmo Gómez Aldaz, cuyo caso se incorpora como ejemplo ilustrativo de las cuestiones planteadas.

I. FUNDAMENTACIÓN

1. Relación de origen, filiación jurídica e identidad

Todo ser humano llega al mundo mediante un proceso corporal de concepción, gestación, parto y nacimiento. Antes de cualquier inscripción, resolución o categoría jurídica, procede de personas concretas y queda situado en una historia material y genealógica propia. Esa procedencia no la crea el Derecho: es una realidad anterior a él, susceptible de conocimiento y, en sus dimensiones biológicas, de comprobación científica.

El Derecho interviene después para reconocer esa realidad y atribuirle efectos. En materia de filiación, el Tribunal Constitucional ha señalado como finalidad la «adecuación de la verdad jurídico-formal a la verdad biológica», vinculándola con la investigación de la paternidad y con la dignidad de la persona (SSTC 138/2005, FJ 4, y 273/2005, FJ 7). Esto no significa que la ciencia determine por sí sola todas las consecuencias jurídicas, pero sí que el Derecho no crea ni puede alterar el hecho material de la procedencia.

La adopción realiza una operación distinta. No reconoce jurídicamente una relación nacida de la generación, sino que constituye, mediante una decisión jurídica, una relación de filiación que no tiene ese origen. Para hacerlo se sirve de una ficción jurídica: atribuye a la relación adoptiva efectos propios de la filiación. Esa ficción puede crear una relación jurídica, pero no modifica la procedencia de la persona ni hace desaparecer su historia de generación, gestación y nacimiento o su genealogía.

Las personas adoptadas viven estos vínculos de maneras diversas. Algunas se identifican profundamente con quienes las criaron y los consideran su «padre» y «madre»; otras no usan esas palabras para la relación adoptiva o dejan de hacerlo al conocer su historia. El cuidado y el afecto pueden construir una familia vivida. La procedencia, por su parte, sitúa a la persona en una historia de nacimiento y en una genealogía propias.

El caso ilustrativo permite expresar esa distinción de forma sencilla. Quien presentó la queja original supo desde niño que había sido adoptado y llamó «papá» y «mamá» a sus adoptantes. Al mismo tiempo, entendía que procedía de un padre y una madre y que esas otras personas lo habían adoptado después. El afecto cotidiano y la conciencia de origen convivían en su experiencia sin contradicción. Esa coexistencia, inicialmente vivida de ese modo, adquirió mucho más adelante una expresión jurídica efectiva en el mismo caso.

La relación de origen forma parte de la identidad porque determina de quién procede una persona y la sitúa en una genealogía. Incluye la historia de generación, gestación y nacimiento, además de sus dimensiones familiares, sociales y jurídicas. Cuando está

jurídicamente determinada como filiación por naturaleza, produce además una posición de estado civil, parentesco jurídico, derechos y obligaciones, y se proyecta sobre los apellidos, el Registro Civil y la documentación personal. En esta queja, «identidad de origen» reúne esas dimensiones vinculadas a una misma realidad: ser hijo de los propios padres de origen.

La equiparación de efectos jurídicos entre la filiación por naturaleza y la adopción no justifica por sí misma que se extingan los derechos derivados del origen. Esa pérdida requiere una justificación propia, atendiendo a la protección de la persona, su identidad y su igualdad de derechos. La relación entre realidad, ficción jurídica y límites de la regulación se desarrolla en el Desarrollo complementario IV.

2. Efectos del modelo adoptivo y límites del derecho a conocer los orígenes

El artículo 178.1 del Código Civil permite que la adopción borre e invalide jurídicamente la identidad con la que una persona nace y obliga a sustituirla por otra ficticia construida por el Derecho: le arrebató sus apellidos, rompe su reconocimiento como hijo de su padre y de su madre y convierte en jurídicamente ajeno aquello que para cualquier otra persona constituye, sencillamente, quién es.

Ese resultado no es una consecuencia necesaria de toda adopción ni ha sido siempre el único modelo del Derecho español. La evolución legislativa muestra el paso desde fórmulas compatibles con la conservación de determinados vínculos y efectos de origen hacia un modelo sustitutivo de origen anglosajón que los extingue como regla general. El desarrollo histórico y comparado de esa transformación se expone en el Desarrollo complementario I.

El reconocimiento del derecho a conocer los orígenes resolvió una parte del problema, pero no las cuestiones posteriores. Una vez conocida la procedencia y, en su caso, jurídicamente determinada la filiación de origen, todavía hay que decidir qué efectos produce, cuáles quedan limitados por la existencia de una adopción, cómo puede expresarse en la identidad registral y documental y si, llegada la edad adulta, la persona dispone de una acción propia para poner fin a la relación jurídica adoptiva.

Para algunas personas adoptadas, la filiación adoptiva expresa quiénes son y a qué familia pertenecen. Para otras, ese lugar corresponde a su filiación de origen. Otras necesitan que ambas filiaciones puedan coexistir sin que una borre a la otra. Y hay quienes no pueden seguir vinculados a la filiación adoptiva constituida durante su infancia. Esta diversidad no nace de una elección entre filiaciones: puede ser un efecto de que la adopción atribuya a un niño, antes de que pueda prestar consentimiento, una filiación ajena y una nueva posición familiar. El Derecho no debe imponer una sola respuesta ni impedir sus efectos: debe permitir conservar la adopción, hacer eficaz la filiación de origen o extinguir la relación adoptiva.

Sobre estas distinciones se articulan las tres cuestiones examinadas a continuación: los efectos de la filiación de origen mientras la adopción permanece (apartados 4 a 6), la posibilidad de que el adoptado adulto ponga fin a esta y su especial relevancia en situaciones de victimización (apartados 7 y 8), y la pérdida impuesta desde la infancia por el modelo sustitutivo (apartado 9).

3. Protección del menor y conservación de los derechos derivados de su origen

La adopción se justifica como una medida de protección de la infancia. Precisamente por eso hay que distinguir qué necesita realmente esa protección y qué consecuencias adicionales

produce el modelo sustitutivo. Cuando la adopción se constituye antes de que el niño pueda prestar consentimiento, este no decide que se extingan sus vínculos jurídicos de origen, que cambien sus apellidos o que su inscripción y documentación pasen a expresar la relación adoptiva; son los adultos y el Estado quienes adoptan esas decisiones en su nombre. Que esas decisiones se adopten con una finalidad protectora no convierte la falta de voluntad del niño en consentimiento. El artículo 177 exige el consentimiento del adoptando mayor de doce años; ese consentimiento no resuelve, sin embargo, la cuestión de su autonomía para extinguir la relación adoptiva en la edad adulta.

El propio Derecho distingue entre filiación, patria potestad, guarda, convivencia, contacto y obligaciones familiares. También distingue entre las facultades de los progenitores y los derechos del hijo: los artículos 110 y 111 permiten limitar o excluir facultades del adulto sin borrar por ello la filiación jurídicamente determinada ni determinadas obligaciones favorables al hijo. Esa separación muestra que proteger al menor no exige tratar como una sola cosa la filiación y el cuidado.

La estabilidad y seguridad del menor son fines legítimos y pueden justificar la exclusión de facultades incompatibles con su protección. Pero la extinción general de derechos de identidad, parentesco, alimentos o sucesión necesita una justificación adicional. Cada restricción debería responder a una incompatibilidad concreta, necesaria y proporcionada, y no a la presunción de que todos los vínculos y efectos jurídicos de origen deben desaparecer para que exista adopción.

Proteger al menor y extinguir por completo su posición jurídica de origen no son la misma cosa. Los fundamentos normativos y el examen de proporcionalidad de esta distinción se desarrollan en el apartado II.1 del Desarrollo complementario II.

4. Filiación de origen jurídicamente determinada: efectos, coexistencia e identidad documental

Conviene separar cuatro cuestiones que no se resuelven unas a otras: conocer los orígenes; determinar jurídicamente la filiación de origen; decidir qué efectos produce esa determinación y cómo se expresa registral y documentalmente; y decidir si el adulto puede extinguir la adopción.

Si los padres de origen no constaban jurídicamente, existe controversia o la inscripción carece de filiación, esa relación debe determinarse por los cauces legales correspondientes. Esa carga probatoria no constituye por sí misma la discriminación denunciada: también una persona no adoptada debe acreditar una filiación desconocida o discutida. La diferencia aparece después, cuando una filiación por naturaleza ya jurídicamente determinada recibe menos efectos por existir una adopción.

El artículo 180.4 establece que la determinación de la filiación por naturaleza del adoptado no afecta a la adopción. La norma abre así la posibilidad jurídica de que ambas situaciones coexistan, posibilidad confirmada en el caso aportado, pero no dice que, para mantener la adopción, la filiación de origen deba quedar vaciada de efectos. Coordinado con los artículos 112 y 113, el problema pasa a ser qué efectos concretos son realmente incompatibles con la adopción y por qué, no si la filiación de origen debe carecer en general de eficacia.

De ahí se deriva un criterio: las facultades de los padres de origen que resulten incompatibles con la protección del menor o con las funciones atribuidas a los adoptantes pueden quedar excluidas; los derechos del hijo derivados de su filiación de origen deberían mantenerse cuando no exista una razón concreta que justifique suprimirlos.

La coexistencia jurídica tampoco significa manejar dos identidades documentales simultáneas. Existe una única identificación documental vigente. Una persona adoptada puede querer conservar sus apellidos y su identidad documental adoptiva y, al mismo tiempo, mantener los efectos compatibles de su filiación de origen; otra puede querer que su identidad registral y documental vigente exprese esa filiación de origen jurídicamente determinada.

Por tanto, deben distinguirse dos preguntas: qué relaciones jurídicas de filiación están determinadas y qué efectos producen; y cuál de ellas se expresa en la documentación cotidiana. Los derechos derivados de la filiación de origen no deberían depender de la identidad documental que la persona adoptada decida conservar.

5. Coexistencia acreditada en el caso ilustrativo

Lo que el apartado 1 expone como coexistencia vivida entre conciencia de origen y relación adoptiva adquirió recientemente en el caso ilustrativo una forma jurídica comprobable. La demanda civil acumuló inicialmente la determinación de la filiación y la nulidad de la adopción, pero el procedimiento terminó separando ambas cuestiones: la nulidad quedó remitida al juzgado competente de Bilbao y la acción de filiación se resolvió en Pamplona.

La Sentencia 472/2024 del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona declaró la filiación paterna no matrimonial en el caso ilustrativo con plenitud de consecuencias legales y fijó los apellidos Gómez y Aldaz sin anular ni revocar la adopción. La Sentencia 701/2025 de la Audiencia Provincial de Navarra confirmó todos esos pronunciamientos y declaró que el artículo 180.4 permite reconocer la filiación por naturaleza sin extinguir previamente la adopción.

Las sentencias no establecen por sí solas un régimen general completo de efectos para todas las personas adoptadas. Pero sí demuestran que ambas situaciones jurídicas pueden coexistir y que la filiación de origen puede producir efectos identitarios reales manteniéndose la adopción.

En el caso ilustrativo, esa coexistencia tuvo expresión judicial, registral y documental: el Registro Civil y el DNI pasaron a reflejar la identidad de origen con los apellidos Gómez Aldaz, mientras la adopción continúa jurídicamente vigente. El recorrido procesal completo y el alcance de estas resoluciones se desarrollan en el apartado II.3 del Desarrollo complementario II.

6. Diferencia de trato respecto de una filiación de origen determinada

La primera cuestión puede formularse mediante una comparación sencilla. Dos personas pueden tener igualmente determinada su filiación por naturaleza. En la persona no adoptada, esa filiación despliega el régimen ordinario de la condición de hijo. En la adoptada, una interpretación extensiva de los artículos 178.1 y 180.4 puede reducir sus efectos por la sola existencia de una adopción constituida durante la infancia.

La diferencia puede afectar a la condición jurídica de hijo, al parentesco, a los derechos familiares, a los apellidos y a la identidad. Por ello incide en la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, en la identidad personal, en la igualdad ante la ley y en la igualdad de los hijos con independencia de su filiación, protegidas por los artículos 10, 14, 18 y 39.2 de la Constitución.

La existencia de una adopción puede justificar restricciones concretas cuando exista una incompatibilidad material y proporcionada con la protección del menor o con las funciones atribuidas a los adoptantes. Lo que se cuestiona es que sirva como justificación general para

reducir los efectos de una filiación de origen jurídicamente determinada incluso cuando la persona es adulta y la coexistencia de ambas situaciones ha demostrado ser posible.

Esta diferencia de efectos entre filiaciones por naturaleza igualmente determinadas sustenta la primera queja. Su examen constitucional y de proporcionalidad se amplía en el apartado II.4 del Desarrollo complementario II.

7. Irrevocabilidad de la adopción y falta de acción propia del adoptado adulto

Al alcanzar la mayoría de edad cesa la razón protectora específicamente vinculada a la incapacidad y al cuidado durante la infancia. La estabilidad de las relaciones familiares puede seguir siendo un interés legítimo, pero no explica por sí sola que la persona adoptada carezca para siempre de una acción general propia para decidir si quiere mantener la relación jurídica constituida sobre ella. La continuidad de la adopción alcanza al parentesco jurídico y puede proyectarse también sobre la descendencia de la persona adoptada.

El artículo 180.1 declara irrevocable la adopción. Esa regla protege justificadamente al menor frente a una revocación unilateral de los adoptantes, pero frente al adoptado adulto produce un efecto diferente: la relación jurídica continúa, aunque él no quiera mantenerla. El artículo 179 permite, en supuestos graves, excluir determinadas funciones y derechos del adoptante; no permite extinguir la adopción. La estabilidad explica que los adoptantes no puedan abandonar unilateralmente la relación; no explica por sí sola por qué el adoptado adulto debe carecer de iniciativa para extinguirla.

El propio ordenamiento muestra que irrevocabilidad y acción del adoptado no son conceptos incompatibles. La legislación de 1970 reconoció durante un tiempo una acción limitada del adoptado adulto para pedir la extinción, y el actual artículo 180.2 permite que determinados progenitores la soliciten, exigiendo el consentimiento del adoptado si ya es mayor de edad. El adulto puede así vetar una iniciativa ajena, pero carece de iniciativa propia equivalente.

La extinción voluntaria y la nulidad responden a preguntas distintas. La nulidad examina si la adopción fue inválida desde su origen. La autonomía del adulto plantea otra cuestión: aunque la adopción hubiera sido válida, si una persona plenamente capaz debe poder decidir que ya no quiere continuar vinculada por ella. El reconocimiento de esa acción exige además regular sus efectos sobre la posición jurídica y procesal de los adoptantes y sobre los derechos, obligaciones y relaciones de parentesco derivados de la adopción, incluidos los que alcanzan a los descendientes de la persona adoptada. El desarrollo histórico, normativo y procesal de esta distinción se recoge en el Desarrollo complementario III.

8. Especial gravedad de las sustracciones, apropiaciones y adopciones sin consentimiento, y de las tramas de «bebés robados»

Las situaciones de partida pueden ser muy diferentes. Un niño pudo ser separado ilícitamente de su madre o entregado para adopción en circunstancias formalmente consentidas o discutibles; después, esa separación pudo formalizarse mediante una adopción jurídicamente constituida —regular o eventualmente inválida— o mediante una apropiación acompañada de una falsa filiación por naturaleza. Esas vías producen hoy consecuencias y posibilidades de reparación distintas.

La propia reforma de la adopción de 1987 reconoció expresamente que el régimen anterior adolecía de una «falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción» y que esa ausencia de control «permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños».

Décadas después, la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, reconoció expresamente como víctimas a las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores y recogió que en España llegaron a producirse situaciones de «secuestro masivo de recién nacidos».

No se trata, por tanto, únicamente de irregularidades individuales ajenas al funcionamiento de la institución, sino de un fenómeno cuya existencia y gravedad han sido reconocidas por el propio legislador en momentos diferentes. Muchos de los niños afectados por aquel régimen son hoy adultos de mediana edad: tomando como referencia adopciones realizadas durante el primer año de vida, quienes fueron adoptados entre 1970 y 1987 tienen actualmente, de forma aproximada, entre 39 y 57 años. La forma jurídica mediante la que después se les atribuyó una filiación resulta decisiva para las posibilidades de reparación que tienen hoy como adultos.

Cuando la sustitución registral de identidad se formalizó mediante una filiación por naturaleza falsa, el ordenamiento ofrece acciones para determinar la filiación verdadera e impugnar la falsa dentro de sus requisitos legales. Cuando se utilizó una adopción, la persona puede llegar a determinar y hacer eficaz su filiación de origen manteniéndose la adopción, pero la relación adoptiva queda especialmente protegida por la irrevocabilidad y el adulto carece de una acción propia general para extinguirla.

La reparación puede terminar dependiendo, por tanto, de la forma jurídica utilizada por terceros. El Estado puede reconocer a una persona como víctima de sustracción y adopción sin consentimiento y, al mismo tiempo, mantenerla vinculada a la relación jurídica que dio forma legal a aquella situación.

En el caso ilustrativo existen reconocimientos administrativos de victimización y, además, una pretensión de nulidad pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao. Ese procedimiento determinará la validez de la adopción concreta objeto del caso. Su resultado, sin embargo, no resolverá el problema general examinado aquí: qué opciones ofrece el ordenamiento a la persona adoptada adulta cuando no puede probar una nulidad histórica o cuando su adopción fue jurídicamente válida. Los antecedentes y el contexto normativo de estas situaciones se desarrollan en el apartado III.2 del Desarrollo complementario III.

9. Pérdida impuesta de vínculos jurídicos de origen y posibilidad de un modelo no sustitutivo

El tercer problema se sitúa en el momento mismo de la constitución de la adopción. El modelo vigente impone como regla que la nueva relación adoptiva extinga los vínculos jurídicos con la familia de origen, en lugar de limitar únicamente aquellos efectos o facultades que sean incompatibles con la protección del menor.

La queja estructural no consiste solamente en que falte una modalidad legal alternativa. Consiste en que la solución impuesta antes de que el niño pueda prestar consentimiento comporta una pérdida jurídica general que la persona no ha decidido y que puede afectar a su identidad, parentesco y derechos, aunque algunos de esos efectos sean compatibles con la relación adoptiva.

La evolución histórica demuestra que han existido modelos menos sustitutivos; el análisis protector muestra que la seguridad del menor puede garantizarse actuando sobre las facultades incompatibles de los adultos; y las sentencias citadas demuestran que filiación de origen y adopción pueden coexistir jurídicamente. Esas tres premisas permiten cuestionar

que la extinción general de la posición jurídica de origen sea una consecuencia necesaria de toda adopción.

Una adopción añadida o no sustitutiva es una posible respuesta a ese problema: incorporaría a los adoptantes a la familia jurídica del niño, atribuyéndoles las funciones y obligaciones necesarias, pero preservaría como regla la filiación de origen y sus efectos compatibles. Su desarrollo y las cuestiones civiles que exigiría regular se examinan en el Desarrollo complementario III.

Este problema no se refiere a una realidad jurídica vacía. La persona cuya protección se invoca fue concebida, gestada y nacida de personas concretas; llegó al mundo con una historia corporal, familiar y genealógica anterior a cualquier resolución. La protección que necesitara durante su infancia debía añadir seguridad y cuidados a esa vida, no convertirla en una identidad enteramente sustituible.

Al llegar a la edad adulta, la persona adoptada debe poder decidir qué eficacia conserva su filiación de origen y qué lugar quiere que mantenga la relación adoptiva en su vida. Esa capacidad respeta tanto a quienes desean conservar íntegramente la adopción como a quienes necesitan recuperar su origen, mantener ambas relaciones o poner fin a la relación adoptiva. Es el sentido humano de las tres cuestiones que esta queja plantea.

10. Carácter general de la queja, competencia y admisibilidad

Los tres problemas expuestos son generales. Afectan a las reglas aplicables a las personas adoptadas, a los criterios administrativos sobre estado civil, Registro Civil y documentación, y a la eventual necesidad de cambios normativos; además, comprometen derechos incluidos en el Título I de la Constitución.

La Ley Orgánica 3/1981 permite al Defensor del Pueblo investigar actos, resoluciones y criterios administrativos relacionados con esos derechos, formular recomendaciones y sugerencias y proponer modificaciones normativas cuando una regla produzca situaciones injustas o perjudiciales.

La queja se refiere a una situación jurídica actual y continuada: los efectos que hoy producen los artículos 178 y 180, la limitación actual de los efectos de una filiación de origen jurídicamente determinada y la ausencia actual de una acción propia del adoptado adulto para extinguir la adopción. Las modificaciones registrales y documentales recientes del caso ilustrativo muestran la actualidad práctica del problema, sin que la admisibilidad dependa únicamente de esas fechas. El detalle sobre competencias administrativas y precedentes institucionales se recoge en el Desarrollo complementario II.

Como circunstancia individual adicional del caso ilustrativo, se encuentra pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao un procedimiento sobre la nulidad de la adopción. Su objeto queda reservado al órgano judicial conforme al artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981 y es distinto de los problemas generales planteados en esta queja.

II. QUEJAS

Sobre la fundamentación expuesta, se formulan las siguientes tres quejas relacionadas, pero diferenciadas:

Primera queja. Diferencia de trato en los efectos de la filiación por naturaleza

Se denuncia que las personas adoptadas pueden recibir un trato jurídico diferente respecto de los efectos de una filiación por naturaleza jurídicamente determinada, de modo que la existencia de la adopción limita o neutraliza efectos que no quedan igualmente restringidos cuando la persona no ha sido adoptada. La queja se refiere a la situación general derivada de la coordinación entre filiación por naturaleza, adopción, Registro Civil e identidad jurídica.

Segunda queja. Irrevocabilidad de la adopción para el adoptado adulto

Se denuncia que el ordenamiento mantiene con carácter indefinido la relación jurídica constituida por la adopción, normalmente durante la minoría de edad, sin reconocer al adoptado adulto y plenamente capaz una acción propia basada en su voluntad actual para poner fin a esa relación. Esta cuestión es distinta de la nulidad de la adopción y no depende de demostrar que su constitución originaria fue inválida. La falta de una acción propia afecta también a quien consintió excepcionalmente su adopción cuando ya era adulto.

Tercera queja. Pérdida impuesta de los vínculos jurídicos de origen al constituirse la adopción

Se denuncia que el modelo vigente impone como regla que la constitución de la adopción extinga los vínculos jurídicos con la familia de origen, privando a la persona desde su infancia de una posición jurídica que podría conservar, total o parcialmente, junto a la relación adoptiva cuando no exista una incompatibilidad concreta que lo impida. La fundamentación previa muestra que proteger al menor no exige necesariamente esa extinción general y que la coexistencia jurídica de la filiación por naturaleza y la adopción no es imposible.

III. SOLICITUDES

En correspondencia con las tres quejas anteriores, SE SOLICITA:

Primera solicitud. Eficacia de la filiación e identidad de origen

Que el Defensor del Pueblo inicie una investigación general sobre la diferencia de trato que produce la interpretación y aplicación de los artículos 178 y 180 del Código Civil cuando la filiación por naturaleza de una persona adoptada ha sido jurídicamente determinada, y valore su compatibilidad con los derechos de igualdad, identidad y protección de los hijos. En particular:

1. Que recabe del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Secretaría de Estado de Justicia y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública información sobre los criterios administrativos y registrales vigentes, las diferencias de práctica existentes y los efectos reconocidos a la filiación de origen mientras permanece la adopción; y que recabe del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía información sobre su traslación al Documento Nacional de Identidad.
2. Que examine expresamente si reducir esa filiación a conocimiento, declaración o efectos residuales constituye una discriminación por condición adoptiva, al atribuir consecuencias diferentes a una filiación igualmente acreditada.
3. Que recomiende, dentro de las competencias administrativas y registrales, una interpretación uniforme que reconozca plena eficacia a la filiación por naturaleza jurídicamente determinada y preserve sus efectos registrales, documentales y administrativos cuando no sean concreta y materialmente incompatibles con la adopción. Cada restricción deberá responder a una finalidad protectora identificable, necesaria y proporcionada.
4. Que la recomendación distinga la coexistencia de dos filiaciones jurídicas de la existencia de una única identidad registral y documental vigente, y proponga los criterios necesarios para que los derechos derivados de la filiación de origen no dependan de la identidad documental que la persona adoptada decida conservar.
5. Sobre esa distinción, que recomiende que se reconozca al adoptado adulto cuya filiación de origen esté jurídicamente determinada la facultad de conservar su identidad documental adoptiva sin perder los efectos compatibles derivados de aquella filiación, o de solicitar que su identidad registral y documental vigente exprese la filiación de origen: la identificación de sus padres y sus apellidos en el Registro Civil, y esos apellidos en el DNI.
6. Que promueva criterios públicos, accesibles y coordinados para que la solución confirmada por las Sentencias 472/2024 y 701/2025 pueda aplicarse con igual alcance a todas las personas adoptadas que se encuentren en la misma situación, sin obligarlas a reproducir un litigio excepcional sobre los efectos de su filiación.
7. Que recomiende al legislador la aclaración de los artículos 178 y 180 necesaria para reconocer los derechos civiles sustantivos derivados de la filiación por naturaleza — incluidos, cuando sean compatibles, los relativos al parentesco jurídico, los alimentos y la sucesión— y limitar cualquier restricción a los efectos concreta y materialmente incompatibles con la adopción.

Segunda solicitud. Acción propia del adoptado adulto para extinguir la adopción

Que el Defensor del Pueblo valore recomendar la modificación del artículo 180 del Código Civil para reconocer a la persona adoptada adulta una acción propia de extinción de la adopción mediante una manifestación libre, personal e informada de voluntad, sin necesidad de acreditar fraude, culpa o nulidad histórica ni de obtener el consentimiento de los adoptantes, mediante un procedimiento que les garantice audiencia y defensa, preserve los efectos patrimoniales ya producidos y regule proporcionadamente los efectos futuros sobre los derechos, obligaciones y relaciones de parentesco derivados de la adopción.

Tercera solicitud. Estudio de una adopción añadida o no sustitutiva

Que el Defensor del Pueblo promueva el estudio de una reforma del artículo 178 que configure, en el plano jurídico, la adopción como una relación añadida y preserve como regla general la filiación por naturaleza jurídicamente determinada, la identidad y los derechos de origen de la persona adoptada, concentrando las limitaciones protectoras en las facultades de los adultos que resulten incompatibles con el cuidado del menor.

Ese estudio deberá analizar su encaje en el sistema español y los efectos que deban regularse en materia de filiación, parentesco jurídico, apellidos, Registro Civil, derechos sucesorios y demás consecuencias civiles. La regulación completa corresponde al legislador. El estudio de esta modalidad no debe condicionar la investigación ni las reformas solicitadas en las dos peticiones anteriores.

Las tres peticiones responden a un mismo principio: la adopción debe añadir protección a la vida de una persona y preservar, en la medida compatible con esa protección, los derechos que derivan de su origen. No puede imponer durante la infancia una extinción general de vínculos y efectos jurídicos de origen y negar después al adulto una acción propia para poner fin a la relación adoptiva.

DESARROLLOS COMPLEMENTARIOS DE LA FUNDAMENTACIÓN

Los desarrollos siguientes amplían los antecedentes, normas, jurisprudencia y consecuencias de las cuestiones expuestas en el cuerpo principal. Se organizan conforme a los tres problemas planteados y a su fundamento común.

Desarrollo complementario I. Formación histórica del modelo adoptivo sustitutivo

Este desarrollo amplía la afirmación de que el modelo vigente no es una consecuencia necesaria de toda adopción, sino el resultado de una evolución legislativa concreta.

Para entender el problema actual importa observar qué cambió en el modelo español de adopción. El Código Civil de 1889 configuró inicialmente una adopción que añadía una relación sin borrar por completo la anterior: el adoptado conservaba los derechos que le correspondían en su familia natural, salvo los relativos a la patria potestad, y podía usar el apellido del adoptante junto al de su familia.

La reforma de 1958 cambió esa lógica al introducir la adopción plena, que su propia exposición de motivos calificó de solución radical. La presentó como una filiación destinada a reproducir la filiación legítima y justificó «cortar de raíz» las interferencias de la familia natural. La Ley 7/1970 consolidó ese modelo sustitutivo, aunque mantuvo junto a él una adopción simple que podía conservar determinados vínculos y combinar apellidos. Finalmente, la Ley 21/1987 eliminó esa dualidad y dejó una única adopción que extingue, como regla general, los vínculos jurídicos con la familia de origen.

Esta evolución no fue exclusivamente española. El modelo de adopción plena y cerrada forma parte de una corriente internacional basada en la filiación exclusiva y en la ruptura con la familia de origen, desarrollada tempranamente en ordenamientos anglosajones y extendida después por Europa. La doctrina jurídica española describía ya en 1963 la adopción inglesa de 1926 como un sistema que extinguía los derechos, deberes y responsabilidades de los padres naturales y los transfería a los adoptantes como si el niño hubiera nacido dentro de su matrimonio.

La propia Ley 21/1987 señaló que había tenido presentes los perfeccionamientos técnicos del Derecho comparado y las reformas recientes de otras legislaciones, y calificó la eliminación de la adopción simple como consecuencia de la «nueva ideología» de la institución. Lo relevante para esta queja es el resultado de esa evolución: el Derecho español pasó de permitir una relación adoptiva compatible con la conservación de determinados vínculos y efectos jurídicos de origen a imponer, como regla general, la extinción de esos vínculos y la constitución de una relación jurídica adoptiva que ocupa su lugar en el estado civil.

Proyección registral, documental y social del modelo sustitutivo

En España, el modelo sustitutivo tiene una consecuencia especialmente visible porque los apellidos expresan de forma estable la genealogía. Al extinguirse los vínculos jurídicos de origen y constituirse la relación adoptiva, cambian también los apellidos, la inscripción registral y la documentación con la que la persona es identificada. Esos efectos se trasladan a la vida cotidiana: el entorno familiar, institucional y social trata al niño conforme a la situación jurídica y a la identidad pública expresada por esos documentos, sin que por ello cambie de quién procede.

El resultado puede describirse objetivamente sin convertirlo en una categoría psicológica ni atribuir una intención maliciosa a los adoptantes: el ordenamiento extingue determinados vínculos y efectos jurídicos de origen y hace que la identidad registral y documental exprese la relación adoptiva. Esta descripción no niega los cuidados, los afectos ni la convivencia que puedan existir.

Reconocimiento posterior del derecho a conocer los orígenes

El Derecho español ha ido reconociendo una primera parte de este problema: el derecho a conocer los orígenes. La Ley 54/2007 reconoció expresamente ese derecho y lo incorporó al artículo 180 del Código Civil. La Ley 26/2015 lo reforzó, obligó a conservar la información durante al menos cincuenta años y atribuyó a las entidades públicas el deber de prestar asesoramiento y ayuda para hacerlo efectivo.

Ese reconocimiento respondió a una necesidad que ya existía. Las personas adoptadas buscaron a sus padres y su historia incluso cuando los expedientes estaban cerrados y el sistema no facilitaba el acceso. La reforma legal reconoció, por tanto, que conocer la procedencia y la propia historia seguía siendo una necesidad para parte de las personas adoptadas.

Desarrollo complementario II. Filiación, protección, efectos, coexistencia y actuación institucional

II.1. Facultades parentales, derechos del hijo y proporcionalidad

La distinción anticipada en el apartado 3 se concreta en varios instrumentos jurídicos. Si un padre o una madre no pueden cuidar adecuadamente a su hijo, pueden suspenderse o retirarse sus facultades parentales, atribuirse la guarda a otras personas, limitarse la convivencia o el contacto y adoptarse las medidas de seguridad necesarias. Todo ello puede hacerse sin negar quién es hijo de quién.

El Derecho también distingue entre las facultades de los progenitores y los derechos del hijo. El artículo 110 del Código Civil mantiene la obligación de velar por los hijos menores y prestarles alimentos incluso cuando el progenitor no ostenta la patria potestad. Visto desde el hijo, esto significa que perder facultades de cuidado no borra automáticamente las obligaciones que el progenitor tiene frente a él.

El artículo 111 lleva esa separación a supuestos especialmente graves. Puede excluir al progenitor de la patria potestad, de las demás funciones tuitivas y de los derechos que la ley le atribuiría respecto del hijo, pero mantiene sus obligaciones de velar por él y prestarle alimentos. La lógica es clara: el Derecho puede privar al adulto de facultades y beneficios sin borrar la filiación por naturaleza jurídicamente determinada ni los derechos favorables del hijo.

La adopción atribuye al niño una nueva posición jurídica familiar y derechos frente a los adoptantes. El problema del modelo sustitutivo es que obtiene ese resultado extinguiendo de forma general la posición jurídica que derivaba de su relación de origen: parentesco jurídico, apellidos y derechos vinculados a su condición de hijo. Así, una medida destinada a protegerlo puede terminar suprimiendo también derechos suyos que no son incompatibles con el cuidado que recibe.

El propio Código Civil contiene indicios de que esa incompatibilidad total no es necesaria. El artículo 178 conserva algunos vínculos jurídicos y permite mantener relaciones con la familia

de origen; el artículo 180.4 admite que la filiación por naturaleza se determine sin extinguir la adopción; el artículo 180.6 reconoce el derecho a conocer los orígenes; y los artículos 108, 109 y 110 atribuyen efectos a la filiación, la conectan con los apellidos y separan las obligaciones parentales de las facultades de cuidado. Leídos conjuntamente, estos preceptos permiten plantear una conclusión: proteger al menor puede exigir limitar determinadas facultades de los adultos, pero no necesariamente extinguir toda la posición jurídica favorable que deriva para el hijo de su relación de origen.

La estabilidad familiar y la seguridad del menor son fines legítimos, y puede ser necesario apartar de los padres de origen las facultades incompatibles con el cuidado. Pero ese primer paso no demuestra que sea necesario extinguir todas las consecuencias jurídicas favorables derivadas de la filiación por naturaleza. El examen de proporcionalidad exige preguntar si existen medios menos lesivos para alcanzar la misma protección. El Derecho dispone de ellos: retirada o suspensión de la patria potestad, atribución exclusiva de las funciones de guarda, limitación de contactos y exclusión de facultades concretas. Si esas medidas protegen al menor, la extinción automática de sus derechos de identidad, parentesco jurídico, alimentos o sucesión necesita una justificación adicional.

Después hay que comparar el beneficio protector obtenido con el sacrificio impuesto a la persona. Que una determinada limitación pueda justificarse por las necesidades de protección durante la infancia no basta, por sí solo, para justificar que todos sus efectos permanezcan intangibles durante la vida adulta o se proyecten sobre los descendientes. Cada efecto que se suprima debería responder a una incompatibilidad concreta y necesaria, no a la presunción general de que todos los vínculos y derechos jurídicos de origen deben extinguirse para que exista adopción.

II.2. Determinación de la filiación y compatibilidad de efectos

El primer paso de este apartado es la determinación jurídica. Si los padres de origen ya constan legalmente, la relación de origen ya está además reconocida en el estado civil como filiación por naturaleza. Si fueron inscritos como desconocidos, existe controversia o la inscripción de nacimiento carece de filiación, lo que debe establecerse por los cauces legales correspondientes es esa determinación jurídica. El Derecho no crea entonces la procedencia ni la relación padre-hijo: las comprueba y les atribuye certeza y efectos jurídicos.

Eso fue lo que ocurrió en el caso ilustrativo. Como inicialmente figuraba inscrito como hijo de padres desconocidos, fue necesaria una sentencia que determinara jurídicamente la filiación paterna. La búsqueda, la prueba genética y el procedimiento judicial sirvieron para acreditar una relación de origen que no constaba jurídicamente. Esa carga no constituye por sí misma la discriminación que se denuncia: también una persona no adoptada tendría que acreditar una filiación desconocida o discutida por los cauces previstos en la ley.

La diferencia de trato aparece en el segundo plano, cuando la filiación por naturaleza ya está jurídicamente determinada. En una persona no adoptada despliega el régimen ordinario de la condición de hijo. En una persona adoptada, en cambio, la interpretación conjunta de los artículos 178.1 y 180.4 ha permitido reducir sus efectos a conocimiento, declaración o consecuencias residuales para mantener incólume la adopción. Por tanto, el problema no es probar de quién se procede, sino qué consecuencias jurídicas se reconocen después a una relación de origen ya acreditada.

El artículo 180.4 dice que «la determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción». Esto asegura que determinar jurídicamente la filiación por

naturaleza no extingue automáticamente la adopción. Pero la norma no dice lo contrario: que para conservar la adopción haya que vaciar de contenido esa filiación. De ahí surge una interpretación alternativa: ambas situaciones jurídicas pueden mantenerse y la filiación por naturaleza producir todos los efectos que no sean concreta y materialmente incompatibles con la adopción.

El artículo 112 aporta la regla general de partida: la filiación produce efectos y su determinación legal puede producirlos retroactivamente cuando sean compatibles con su naturaleza y la ley no disponga lo contrario. Si se coordina esa regla con los artículos 178.1 y 180.4, la pregunta deja de ser si la filiación por naturaleza debe producir algún efecto y pasa a ser otra más precisa: qué efectos concretos excluye realmente la existencia de la adopción y por qué.

El artículo 113 añade otra cuestión: una filiación no puede desplegar eficacia mientras exista otra filiación contradictoria. Por tanto, hay que saber si, en el plano jurídico, la filiación por naturaleza y la relación adoptiva son necesariamente contradictorias. El artículo 180.4 permite determinar la primera sin afectar a la adopción, y las sentencias citadas han confirmado en este caso que ambas situaciones jurídicas pueden coexistir. Si pueden coexistir, el problema ya no es elegir una y negar la otra, sino ordenar qué efectos corresponden a cada relación jurídica.

Este análisis concreta el criterio anticipado en el apartado 4: no existe una incompatibilidad abstracta entre ambas situaciones jurídicas; la limitación debe justificarse para cada efecto concreto.

II.3. Coexistencia acreditada y alcance de las resoluciones citadas

Hasta aquí se ha formulado una posibilidad jurídica: que la filiación de origen produzca efectos sin que por ello desaparezca la adopción. El caso ilustrativo permite comprobar que esa coexistencia no es solo teórica. Los antecedentes existentes habían admitido la determinación o el acceso registral de la filiación de origen manteniendo la adopción, pero con un alcance limitado: la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de julio de 1991 aludió a efectos residuales, y la Sentencia del Tribunal Supremo 1059/2023 examinó un supuesto diferente en el que una resolución firme anterior había atribuido a la filiación por naturaleza una eficacia meramente declarativa.

La demanda civil, presentada el 21 de junio de 2021, acumuló la determinación e impugnación de la filiación y la nulidad de la adopción. Se formuló entonces partiendo de una premisa: que, para obtener el reconocimiento y la eficacia jurídicos de la relación de origen y hacerla visible en la identidad registral y documental, era necesario anular antes la adopción.

El procedimiento terminó separando ambas cuestiones. Mediante Auto de 13 de noviembre de 2024, identificado como documento 3 en la relación final, el Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona declaró que no era competente para resolver la nulidad y remitió esa cuestión al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao, que había tramitado la adopción en 1972. La nulidad no fue desestimada ni resuelta sobre el fondo. El juzgado de Pamplona continuó únicamente con la acción de filiación.

Esa acción sí fue resuelta. La Sentencia 472/2024, identificada como documento 1 en la relación final, declaró la filiación paterna no matrimonial entre José Ramón Gómez Fernández y quien presentó la queja original, lo hizo con plenitud de consecuencias legales y fijó el orden de los apellidos Gómez y Aldaz. Todo ello ocurrió sin anular ni revocar la adopción.

La cuestión central llegó después a la apelación: se discutió expresamente si podía reconocerse esa plenitud de consecuencias mientras la adopción seguía vigente. La Sentencia 701/2025 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, identificada como documento 2 en la relación final, confirmó todos los pronunciamientos. La Audiencia afirmó que el artículo 180.4 permite declarar la filiación por naturaleza sin revocar o anular previamente la adoptiva, que ambas no son necesariamente incompatibles y que los apellidos Gómez Aldaz se derivan coherentemente de la filiación declarada conforme al artículo 109 del Código Civil.

La Audiencia precisó que los efectos concretos serían los que correspondieran conforme a la legalidad vigente. Esa precisión marca también el límite de las sentencias: no establecen por sí solas un régimen general completo para todas las personas adoptadas. Pero sí demuestran algo decisivo para esta queja: la relación de origen puede quedar jurídicamente determinada como filiación por naturaleza, producir efectos identitarios y convivir con una adopción que permanece vigente. Lo que queda por aclarar con alcance general es qué otros efectos deben reconocerse y cuáles pueden excluirse justificadamente.

En el caso ilustrativo, esa coexistencia tuvo además una expresión documental concreta. Después de figurar primero como hijo de padres desconocidos y después con una identidad registral y documental adoptiva, el Registro Civil y el DNI pasaron a reflejar la identidad de origen con los apellidos Gómez Aldaz, mientras la adopción continuó jurídicamente vigente. La filiación por naturaleza no quedó así reducida a una información sobre antecedentes: produjo efectos jurídicos, determinó los apellidos y se expresó en la documentación personal sin extinguir la adopción. El resultado confirma que ambas situaciones pueden coexistir jurídicamente y, al mismo tiempo, existir una sola identidad registral y documental vigente.

II.4. Igualdad, identidad y control de las restricciones

Los derechos constitucionales enumerados en el apartado 6 ofrecen el marco para controlar esta diferencia de trato. A ellos se añade el derecho a preservar el nombre y las relaciones familiares como elementos de la identidad, reconocido por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las sentencias constitucionales citadas no resuelven directamente la coexistencia entre filiación de origen y adopción, pero ayudan a fijar el criterio. La STC 28/2024 vincula la determinación de la filiación con la identidad y el libre desarrollo de la personalidad y recuerda que crea un vínculo jurídico de derechos y obligaciones recíprocos. La STC 200/2001 aplicó la igualdad de los hijos a una restricción legal de la pensión de orfandad de los hijos adoptivos, declaró su inconstitucionalidad y exigió que cualquier diferencia de trato tenga una justificación objetiva, razonable y proporcionada.

La pregunta es entonces si la existencia de una adopción ofrece una justificación suficiente para reducir de forma general esos efectos. Durante la infancia, la estabilidad y la protección del menor pueden justificar restricciones concretas. Pero esa razón pierde fuerza cuando la filiación por naturaleza ya está determinada, la persona es adulta y se ha demostrado que ambas situaciones jurídicas pueden coexistir.

La respuesta no tiene por qué ser que todos los efectos de ambas situaciones jurídicas sean siempre idénticos. Lo que se exige es justificar cada restricción. Si un efecto concreto resulta incompatible con la protección del menor o con las funciones atribuidas a los adoptantes, puede limitarse. Los demás derechos derivados de la filiación por naturaleza deberían

preservarse. Así se aplica el juicio de proporcionalidad: identificar la finalidad de cada restricción y comprobar si es necesaria y proporcionada.

Como se explicó en el apartado 4, este criterio tampoco obliga a nadie a abandonar su identidad registral y documental adoptiva: quien quiera conservarla podría hacerlo sin perder los efectos compatibles de su filiación por naturaleza, y quien quiera que su identidad vigente exprese su origen podría solicitar que el Registro Civil y la documentación reflejen los padres y apellidos correspondientes a esa filiación ya determinada.

II.5. Destinatarios administrativos y precedente de actuación del Defensor

Las actuaciones que se solicitan tienen también destinatarios administrativos concretos. La Secretaría de Estado de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública tienen competencias sobre el estado civil y el Registro Civil, la coordinación funcional de sus oficinas, la resolución de consultas y la preparación de propuestas normativas. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía son competentes sobre el Documento Nacional de Identidad y utilizan los datos del Registro Civil para expedirlo. De ellos puede obtenerse información sobre los criterios vigentes y, dentro de sus competencias, una respuesta coordinada.

Existe además un antecedente institucional relevante. El Defensor del Pueblo ya ha formulado recomendaciones a la Dirección General para garantizar una aplicación coordinada de la filiación en los registros civiles. Ese precedente muestra que puede investigar criterios registrales, comprobar diferencias de práctica y recomendar una interpretación pública y uniforme. Si determinados efectos civiles sustantivos no pueden garantizarse por vía administrativa, la respuesta deberá completarse mediante la correspondiente aclaración legislativa de los artículos 178 y 180.

Desarrollo complementario III. Irrevocabilidad, victimización y alternativas al modelo sustitutivo

III.1. Acción del adoptado adulto y diferencia entre extinción y nulidad

El artículo 180.1 declara que la adopción es irrevocable. La estabilidad y seguridad del menor ofrecen una justificación evidente para impedir que quienes asumieron voluntariamente su cuidado puedan revocar la adopción a voluntad. Frente al adoptado adulto, sin embargo, la regla produce otro efecto: la relación jurídica continúa, aunque él no quiera mantenerla. El artículo 179 le permite pedir, en un supuesto grave y dentro de un plazo limitado, la exclusión del adoptante de determinadas funciones y derechos, pero no la extinción de la adopción. Para obtener esa extinción por iniciativa propia, el adoptado solo puede intentar acreditar una invalidez originaria sometida a hechos, pruebas y límites procesales.

La legislación española ya reconoció que la irrevocabilidad era compatible con una acción del adoptado adulto. El artículo 177 introducido por la Ley 7/1970 permitía al adoptado pedir judicialmente la extinción durante los dos años siguientes a su mayoría de edad cuando concurrieran causas equivalentes a la desheredación de los ascendientes. Era una acción limitada por causa y plazo, pero lo reconocía como sujeto legitimado. La Ley 21/1987 eliminó esa facultad antes de que quien presentó la queja original alcanzara la mayoría de edad.

El propio artículo 180.2 muestra una asimetría dentro de la adopción. Permite a los progenitores que, sin culpa suya, no intervinieron en el expediente solicitar su extinción dentro de los dos años siguientes, siempre que no se perjudique gravemente al menor. Si el adoptado ya es mayor de edad, la extinción requiere su consentimiento expreso. El adulto

dispone así de un derecho de veto sobre una iniciativa ajena, pero carece de iniciativa propia para pedir la extinción de la adopción.

El Derecho comparado confirma que una adopción plena puede extinguirse judicialmente sin desconocer la seguridad jurídica. La Adoption Act 2009 de Queensland permite al adoptado adulto solicitar al Tribunal Supremo la extinción de la orden definitiva por falsedad, fraude, influencia indebida, falta de consentimiento libre u otras circunstancias excepcionales; exige notificar a las partes y permite decidir aunque las demás partes no comparezcan tras ser debidamente notificadas; y dispone que la extinción no afecta a lo legítimamente realizado ni a los derechos, privilegios u obligaciones adquiridos mientras la adopción estuvo vigente. No reconoce una acción basada únicamente en la voluntad del adulto, pero demuestra que irrevocabilidad, audiencia de los afectados, regulación de los efectos y protección de las situaciones consolidadas no son exigencias incompatibles.

La expresión «autonomía filiativa del adoptado» se utiliza aquí en un sentido jurídico limitado. No significa que una persona pueda elegir su procedencia, inventar una filiación o decidir quiénes son sus padres: la relación de origen no depende de su voluntad. Designa únicamente la facultad de la persona adoptada adulta para decidir si quiere mantener o extinguir la relación jurídica constituida mediante su adopción. Comprende tanto la adopción decidida por otros durante su minoría de edad como la excepcionalmente consentida cuando ya era adulta. La mayoría de edad formal no garantiza siempre una independencia personal y familiar efectiva, y el conocimiento de los propios orígenes y de la propia historia puede reconstruirse muchos años después. En cualquier caso, un consentimiento prestado en un momento determinado no debe hacer irrevocable para toda la vida, frente a su titular, una relación jurídica que este ya no desea mantener. Esta facultad no afecta a quienes desean conservarla ni exige negar los afectos o la vida familiar que hayan existido.

La nulidad histórica y la autonomía filiativa del adoptado responden a preguntas diferentes. La primera pregunta si la adopción fue inválida desde su origen y exige reconstruir, después de más de medio siglo, qué ocurrió, suplir documentos y personas desaparecidos y afrontar, en este caso, el expurgo del expediente. La segunda plantea si, aunque la adopción hubiera sido válida, una persona plenamente capaz debe poder decidir que no quiere continuar vinculada por ella. La mayoría de edad debe permitir al adoptado poner fin jurídicamente a esa relación cuando así lo decida.

La adopción sitúa a los adoptantes y al adoptado en las posiciones jurídicas de padres e hijo y extiende el parentesco a los descendientes del adoptado y a la familia de los adoptantes. Su extinción afectaría, hacia el futuro, a los derechos y obligaciones que dependen de esa filiación, entre ellos los alimentos y los derechos sucesorios legales. Conforme al artículo 180.3, no causaría la pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas ni alcanzaría a los efectos patrimoniales ya producidos.

Por afectar directamente a la filiación de los adoptantes, el procedimiento debe garantizarles el conocimiento de la pretensión, audiencia, defensa, prueba y recurso. Estas garantías permiten discutir la validez y libertad de la manifestación del adoptado y los efectos jurídicos de la extinción, pero no deben convertir su consentimiento en requisito: de lo contrario, la acción propia del adoptado adulto quedaría reducida a una extinción por mutuo acuerdo.

La reforma debe precisar también cómo afecta la extinción al parentesco jurídico de los descendientes de la persona adoptada y de los demás familiares, si restablece los efectos jurídicos de la filiación de origen y cuándo puede intervenir quien acredite un derecho o interés

jurídico directo afectado. La existencia de esos efectos exige regularlos; no justifica atribuir a toda la familia una facultad de oposición a la decisión del adoptado adulto.

III.2. Sustracción, tráfico, apropiación y adopción sin consentimiento, y tramas de «bebés robados»

La insuficiencia del sistema resulta especialmente grave cuando la búsqueda de los orígenes revela que la adopción no respondió a una entrega legítima, sino que fue el instrumento utilizado para consolidar una sustracción, un tráfico o una separación realizada contra la voluntad de los padres.

La reforma de 1987 reconoció al mismo tiempo la gravedad de lo ocurrido bajo el régimen anterior. Su preámbulo afirmó que existía una «falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción» y que esa ausencia de control permitía «en ocasiones el odioso tráfico de niños». El legislador sabía, por tanto, que la apariencia formal de una adopción podía haber servido para consolidar entregas ilícitas de niños de corta edad.

La misma reforma que reconoció la existencia de ese tráfico consagró como regla la ruptura completa de los vínculos jurídicos con la familia de origen y eliminó la acción de extinción que la legislación de 1970 había reconocido al adoptado adulto. No estableció una vía específica para que quienes descubrieran que su adopción había formalizado una sustracción pudieran poner fin a la relación jurídica adoptiva constituida mediante ella.

Décadas después, el Estado volvió a reconocer institucionalmente la existencia del problema. En 2012, el Ministerio de Justicia creó expresamente los ficheros de «Solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos» y de «Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos». La propia Orden justificaba estas medidas por las investigaciones sobre supuestas sustracciones y contemplaba expresamente la investigación de la identidad genética de hijos adoptados de forma irregular.

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, dio un paso más. Su preámbulo recoge que en España se produjo «incluso secuestro masivo de recién nacidos» y reconoce como víctimas a las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores. Añade además que esta práctica, inicialmente vinculada a la represión política y posteriormente ideológica, moral, religiosa y de género, «se prolongaría a lo largo de décadas con propósitos económicos o de distinta naturaleza». Es precisamente este fenómeno prolongado y organizado el que socialmente ha quedado asociado a las denominadas tramas de «bebés robados».

El Estado conoce, por tanto, que existen personas cuya identidad registral y documental fue sustituida y cuya posterior adopción pudo servir para formalizar jurídicamente aquella sustitución. Reconoce la necesidad de buscar, conserva datos, facilita pruebas genéticas y puede reconocer administrativamente a las víctimas. Sin embargo, no les proporciona una acción adulta propia para extinguir la adopción que consolidó jurídicamente esos hechos.

En el caso ilustrativo, la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal expedida por el Gobierno de España reconoce que en 1971 quien presentó la queja original fue sustraído y adoptado sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores. La resolución de Gogora lo reconoce como víctima por la sustracción de un menor a sus progenitores y su entrega en adopción sin el consentimiento de aquellos. Ambas se identifican como documentos 6 y 7 en la relación final.

En cuanto al procedimiento judicial de nulidad mencionado en el apartado 8, rige la delimitación del apartado 10: su objeto individual es distinto. La cuestión examinada aquí es la ausencia de una acción propia del adoptado adulto, incluso siendo un «bebé robado», para extinguir la adopción que consolidó jurídicamente una sustracción o separación ilícita, con independencia de lo que pueda probarse y resolverse en cada procedimiento individual.

Los antecedentes anteriores concretan la desigualdad anticipada en el apartado 8: cuando la sustitución se formalizó mediante una adopción, el reconocimiento de la victimización no viene acompañado de una acción propia para extinguir la relación jurídica que le dio forma legal. Esta contradicción exige una respuesta general.

III.3. Adopción añadida o no sustitutiva

Sobre el problema definido en el apartado 9 y los criterios protectores desarrollados en el apartado II.1 del Desarrollo complementario II, puede concretarse el alcance de una adopción añadida o no sustitutiva. No se trata únicamente de ofrecer una modalidad alternativa, sino de evitar que la protección comporte como regla la pérdida de una posición jurídica de origen cuyos efectos pueden ser compatibles con la relación adoptiva.

Una adopción añadida incorporaría a los adoptantes a la familia jurídica del niño sin exigir como regla general la extinción de todos los vínculos y efectos jurídicos derivados de su relación de origen. Atribuiría a los adoptantes las funciones y obligaciones parentales necesarias, limitaría de forma expresa las facultades de los padres de origen que fueran incompatibles con la protección y preservaría para el adoptado la determinación jurídica de su relación de origen, su genealogía, su identidad y los derechos compatibles.

Su regulación debería ordenar expresamente las funciones y obligaciones de los adoptantes, las facultades de los padres de origen que deban excluirse por ser incompatibles con la protección, los efectos de la filiación de origen que se preservan y las consecuencias en materia de parentesco, apellidos, Registro Civil, alimentos y sucesión. La experiencia española anterior a la adopción plena y la coexistencia alcanzada en el caso ilustrativo muestran que añadir jurídicamente una relación adoptiva sin eliminar todos los efectos de origen no es imposible.

Desarrollo complementario IV. Realidad de origen, identidad y límites de la sustitución jurídica

Este desarrollo cierra la fundamentación desde la realidad humana sobre la que actúa el Derecho. Amplía la distinción entre relación de origen y relación jurídica adoptiva, explica los límites de una sustitución jurídica de filiación y recoge una perspectiva presente entre personas adoptadas que viven esa sustitución como una forma de violencia identitaria.

IV.1. Procedencia, gestación, nacimiento e identidad de origen

La procedencia no es únicamente un dato genético almacenado en un expediente. Cada persona se forma en una gestación, nace de un parto y comienza su vida fuera del útero dentro de una continuidad corporal, sensorial y relacional. La investigación sobre aprendizaje prenatal y neonatal documenta, entre otros fenómenos, respuestas tempranas a la voz y al olor maternos.

Estos datos no permiten reconstruir exactamente la vivencia de cada recién nacido ni afirmar que toda separación produzca el mismo efecto. Sí impiden reducir el origen a una información

retrospectiva: la genealogía y el nacimiento remiten a una continuidad material que precede a la memoria narrada y a la inscripción jurídica.

IV.2. Relación de origen, adopción y límites de la sustitución jurídica

La relación de origen procede de la generación y sitúa a la persona en una genealogía. Su determinación jurídica reconoce esa procedencia y le atribuye los efectos previstos por el ordenamiento. La adopción, en cambio, constituye una relación jurídica por un acto regulado por la ley. El artículo 108 del Código Civil distingue ambas vías y equipara sus efectos conforme a las disposiciones del propio Código. Igualar efectos jurídicos no convierte en idénticos los hechos de los que nacen esas relaciones.

La expresión «ficción jurídica» se utiliza aquí para describir la técnica de atribuir a una relación efectos como si concurriera un presupuesto material distinto: en este caso, organizar la relación adoptiva conforme al modelo jurídico de la condición de hijo. No califica de ficticios los cuidados, los afectos ni la convivencia. El objeto de examen es la construcción normativa y, en particular, el paso adicional por el que el modelo sustitutivo extingue los vínculos jurídicos de origen.

Ese paso adicional es decisivo. Atribuir a los adoptantes responsabilidades y obligaciones respecto del niño y privar a este de su posición jurídica de origen son decisiones diferentes. La utilidad protectora de la primera no demuestra por sí sola la necesidad de la segunda. La cuestión jurídica es qué razón permite que una relación constituida para proteger al niño comporte también la pérdida de derechos derivados de su propio origen.

IV.3. Los derechos de la persona como límite de la sustitución jurídica

La facultad del legislador para constituir relaciones jurídicas y determinar sus efectos está sometida a la Constitución. El artículo 9.3 prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos; no establece una prohibición general de las ficciones jurídicas. El argumento de esta queja consiste en que la construcción legal de una relación adoptiva no justifica por sí misma las restricciones de derechos que se vinculan a ella.

El juicio constitucional aplicable se desarrolla en el apartado II.4 del Desarrollo complementario II, a partir de las SSTC 200/2001 y 28/2024. Aquí interesa su consecuencia específica para la ficción jurídica adoptiva: la equiparación entre relaciones de distinto origen debe valorarse por sus efectos sobre la persona, y tanto la extinción de derechos de origen como la permanencia forzosa de la relación adoptiva requieren una justificación propia, objetiva y proporcionada.

IV.4. Aplicación a las tres quejas

Aplicado a la primera queja, este argumento exige justificar por qué una adopción debería reducir los efectos compatibles de una filiación de origen jurídicamente determinada.

Aplicado a la segunda, exige justificar por qué una relación creada por el Derecho debe permanecer frente a la voluntad del adulto, cuando la relación de origen no depende de una decisión jurídica equivalente.

Aplicado a la tercera, exige justificar por qué la protección del niño debe extinguir también sus derechos de origen si las funciones protectoras pueden atribuirse y las facultades incompatibles de los adultos pueden excluirse por separado.

El fundamento común es, por tanto, que la ficción jurídica adoptiva debe estar al servicio de la persona protegida. Su coherencia interna como modelo no basta para justificar la supresión

de derechos de origen ni su mantenimiento irreversible frente al adulto: cada consecuencia debe responder a razones propias, verificables y proporcionadas.

IV.5. Una perspectiva presente entre personas adoptadas

La adopción no se vive de una única manera. Hay personas adoptadas que se reconocen plenamente en la relación adoptiva y desean conservarla; hay otras que necesitan hacer eficaz su filiación de origen, y otras que viven la sustitución como una imposición que no pueden aceptar. Esta última perspectiva está presente en comunidades de personas adoptadas dentro y fuera de España, aunque no pretenda representar a todas.

Para quienes comparten esta perspectiva, las palabras «padre», «madre» e «hijo» nombran primordialmente la relación de generación y de nacimiento. Los adoptantes pueden haber cuidado, convivido, amado y asumido responsabilidades decisivas; esas realidades pueden ser valiosas sin obligar a que toda persona adoptada los sitúe, en su propio lenguaje y conciencia, en el lugar de sus progenitores de origen.

La pluralidad de vivencias no resuelve el conflicto imponiendo una sola identidad filiativa. Exige que el ordenamiento reconozca opciones adultas reales y que no trate como insignificante el sufrimiento de una minoría porque otras personas vivan su adopción de modo diferente.

IV.6. Testimonio final

En la queja original, quien la presentó expone que durante buena parte de su vida asumió la identidad adoptiva en la que fue socializado. Conocer su filiación de origen y las circunstancias por las que fue separado de ella cambió el sentido de esa identidad: comprendió que la relación adoptiva no se había limitado a añadir cuidado a su vida, sino que había sustituido jurídicamente su origen y ordenado su historia como si procediera de otras personas.

Expone también que no niega los afectos, los cuidados ni la vida compartida con sus adoptantes, pero que no puede aceptar que esos vínculos sustituyan, en su conciencia o en su lenguaje, a su padre y a su madre de origen. En el caso ilustrativo, la separación se produjo cuando tenía horas de vida; sostiene que la ausencia de memoria narrable no convierte en inexistente la pérdida de continuidad con la mujer que lo gestó y le dio a luz.

Emplea «identicidio» como una descripción de esa experiencia de borrado y sustitución de filiación, genealogía, nombre y verdad de origen, no como una calificación penal autónoma. Su testimonio concluye con la convicción de que ninguna persona adulta debe permanecer obligada por una identidad filiativa impuesta durante su infancia cuando ya conoce su historia y no se reconoce en ella.

FUENTES JURÍDICAS, CIENTÍFICAS E HISTÓRICAS PRINCIPALES

- Constitución Española, especialmente artículos 9.3, 10, 14, 18 y 39.
- Código Civil, especialmente artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113, 177, 178, 179 y 180, así como sus redacciones históricas.
- Ley de 24 de abril de 1958 por la que se modifican determinados artículos del Código Civil.
- Ley 7/1970, de 4 de julio, de modificación del capítulo V del título VII del libro I del Código Civil, sobre adopción.
- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, de modificación de determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, especialmente su preámbulo.
- Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, especialmente artículos 15, 17, 28 y 30.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, especialmente artículos 12 y 13.
- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, especialmente artículo 40.
- Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, especialmente su artículo 12 y la modificación del artículo 180 del Código Civil.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
- Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, especialmente su preámbulo y artículo 23.
- Orden JUS/2146/2012, de 1 de octubre, sobre posibles sustracciones de recién nacidos.
- Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, por el que se regula el Documento Nacional de Identidad.
- Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, sobre la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en su redacción vigente.
- Queensland, Adoption Act 2009, especialmente secciones 219 a 226.
- Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente artículos 7, 8, 20 y 21.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 200/2001, de 4 de octubre, especialmente fundamentos jurídicos 4 a 7.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo, especialmente fundamento jurídico 4.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 273/2005, de 27 de octubre, especialmente fundamento jurídico 7.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 28/2024, de 27 de febrero, especialmente fundamento jurídico 5.
- Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de julio de 1991, citada en la Sentencia 701/2025.
- Sentencia del Tribunal Supremo 1059/2023, ECLI:ES:TS:2023:2995.
- Sentencia 472/2024 del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona.
- Sentencia 701/2025 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra.
- Recomendación del Defensor del Pueblo de 12 de febrero de 2025, queja 24022580, «Medidas para garantizar en los registros civiles las inscripciones de nacimiento de parejas de mujeres no casadas».
- Joaquín Madruga Méndez, «La adopción», Anuario de Derecho Civil, vol. 16, n.º 3, 1963, pp. 747-782, especialmente p. 777 y pp. 779-781.
- Diana Marre, «Los silencios de la adopción en España», Revista de Antropología Social, n.º 18, 2009, pp. 97-126, especialmente pp. 104-105.
- Jean-François Mignot, «Full adoption in England and Wales and France: a comparative history of law and practice (1926-2015)», Adoption & Fostering, vol. 41, n.º 2, 2017, pp. 142-158, DOI 10.1177/0308575917704551.
- Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, especialmente artículos 26 y 30.

- Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Key Theme: Article 8 - Filiation, 2026; y Guide on case-law of the Convention: Rights of the Child, 2026.
- Marx, V. y Nagy, E., «Fetal Behavioural Responses to Maternal Voice and Touch», PLOS ONE, 2015, 10(6), e0129118.
- Marin, M. M.; Rapisardi, G.; y Tani, F., «Two-day-old newborn infants recognise their mother by her axillary odour», Acta Paediatrica, 2015, 104(3), pp. 237-240.
- Sullivan, R. M. y Toubas, P., «Clinical usefulness of maternal odor in newborns: soothing and feeding preparatory responses», Biology of the Neonate, 1998, 74(6), pp. 402-408.

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA DEL CASO ILUSTRATIVO

Los documentos siguientes se identifican como soporte del caso ilustrativo y no se reproducen en este escrito de adhesión. Se solicita su consulta en el expediente de la queja original y, si alguno no obra en él, que se requiera su aportación a su promotor.

1. Sentencia 472/2024 del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona, que determina la filiación de origen con plenitud de consecuencias legales.
2. Sentencia 701/2025 de la Audiencia Provincial de Navarra, que confirma la anterior.
3. Auto de 13 de noviembre de 2024 del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Pamplona, que declara su falta de competencia funcional para resolver la nulidad de la adopción y atribuye esa competencia al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Bilbao.
4. Certificación literal de nacimiento actualizada correspondiente al caso ilustrativo.
5. Certificación policial que acredita la correspondencia entre las identidades registrales anterior y actual del caso ilustrativo.
6. Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal expedida por el Gobierno de España el 19 de febrero de 2026 (expediente 523-950967), expedida todavía a nombre de la identidad anterior.
7. Resolución de 6 de julio de 2026 del director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, que reconoce como víctima a quien presentó la queja original conforme al artículo 4.2.I de la Ley 9/2023.